

# Documentación

## **1. Las cumbres presidenciales**

- 1.1. X Cumbre de presidentes centroamericanos. Declaración de San Salvador.
- 1.2. Apoyo total a la paz de El Salvador.
- 1.3. Declaración de Guadalajara.

## **2. Relaciones cívico-militares**

- 2.1. René Emilio Ponce. Nuestra visión de las relaciones cívico militares en la consolidación de la democracia.

## **3. Derechos humanos**

- 3.1. Consejo Económico Social. Comisión de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en El Salvador.

## 1. Las cumbres presidenciales

### 1.1. X Cumbre de presidentes centroamericanos. Declaración de San Salvador.

Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, reunidos en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, los días 15, 16 y 17 de julio de 1991, con el objeto de analizar la situación prevaleciente en el área y definir el mecanismo institucional adecuado para alcanzar efectivamente la integración centroamericana en lo político, económico, social y cultural.

*Tomando en cuenta* el resultado de los esfuerzos realizados en la búsqueda de la paz y el bienestar económico y social de nuestros pueblos, mediante el respeto a los derechos humanos, la reconciliación nacional y el diálogo, la consolidación de la democracia, y el fortalecimiento de sus instituciones, del Estado de derecho y de los mecanismos conducentes a la creación de un clima de confianza, cooperación y seguridad.

*Considerando* que los cambios y transformaciones acaecidos en los últimos años en el mundo, sitúan a Centroamérica en una etapa histórica que implica una renovada visión de su propio proceso de integración y de su inserción en un orden mundial caracterizado por la interdependencia, el surgimiento de nuevas formas de integración y cooperación y una aplicación efectiva del derecho internacional.

*Persuadidos* de que es necesario continuar con todos esos esfuerzos e incorporar activamente a Centroamérica en el nuevo orden internacional.

#### *Acuerdan:*

1. Reafirmar su compromiso de continuar cumpliendo irrestrictamente con los acuerdos de Esquipulas, cuyos mecanismos han permitido avances significativos en la pacificación y la democratización, condiciones indispensables para el pleno disfrute de la libertad, en un marco de justicia y de impulso al desarrollo.

2. Reiterar su convicción de que la legitimidad del poder público emana de la voluntad popular libremente expresada en los procesos electorales.

3. Condenar enérgicamente la violencia, el terrorismo y los actos de desestabilización que atentan contra los procesos democráticos, así como el recurso a medios violentos para alcanzar objetivos políticos.

4. Los presidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, expresan nuevamente su reconocimiento y decidido apoyo al gobierno de El Salvador y a su presidente Alfredo Cristiani, por los esfuerzos y medidas adoptadas para el fortalecimiento del proceso de democratización de dicho país, evidenciado por la existencia de un amplio diálogo político, las elecciones de marzo recién pasado, la integración de una asamblea legislativa ampliada y totalmente pluralista, y por el inicio del proceso de reforma constitucional orientado, principalmente, a reafirmar la supremacía del poder legítimamente constituido, establecer mecanismos de garantía para los derechos humanos, fortalecer el poder judicial y la administración de justicia y perfeccionar los procesos electorales. Asimismo, por su firme voluntad de continuar buscando la paz, la reconciliación nacional y la solución política al conflicto interno de dicho país.

Reiterar nuevamente la condena a los actos de violencia y terrorismo por considerar que no tienen justificación alguna y, estando plenamente enterados del desarrollo del proceso de diálogo-negociación y firmemente convencidos de que existen las condiciones necesarias para ello, demandar, para el bien de Centroamérica y bajo la verificación de la Organización de las Naciones Unidas, el desarme y desmovilización del FMLN, a fin de que se incorpore, dentro de un marco de plena legalidad a la vida civil, institucional y política de

El Salvador.

5. Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, manifiestan su gran satisfacción por los avances logrados a partir de la iniciativa integral, realista y nacionalista del presidente de Guatemala, ingeniero Jorge Serrano Elías, que permite, por medio del diálogo y de conformidad con la agenda aprobada, la incorporación de los integrantes de las fuerzas irregulares a la vida política y pacífica dentro del marco constitucional.

Apoyan asimismo, la creación en Guatemala del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) destinado a facilitar esa incorporación, lo que incide positivamente en el éxito del proceso de reconciliación nacional.

6. Aceptar complacidos la decisión del gobierno de Panamá de incorporarse activa y plenamente al proceso de integración centroamericano, teniendo en cuenta los lineamientos de su nueva política económica y social y las recomendaciones hechas por la comisión mixta de integración de Panamá, en cuanto a la gradualidad y complementariedad de dicha vinculación creciente al proceso integrador de la región.

Al ver con agrado la decisión adoptada por Panamá de iniciar inmediatamente los estudios técnicos conducentes a la multilateralización de sus relaciones comerciales con los demás países de la región y con el objeto de facilitar la incorporación de ese hermano país, modificar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas, el Acuerdo de Cooperación Regional para la Erradicación del Tráfico Ilícito de Drogas y el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

7. Instruir a la comisión de seguridad para que, en relación con el mandato de la Declaración de Puntarenas para adoptar un acuerdo en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamentos y efectivos militares, éste sea presentado a la brevedad posible.

Agradecer al gobierno de Honduras la presentación del proyecto de Tratado Centroamericano de Seguridad y enviarlo a la comisión de seguridad para su estudio y consideración.

8. Activar la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), como sistema institucional regional, que dará seguimiento a todas las decisiones adoptadas en las cumbres y coordinará su ejecución. Con ese propósito, instruyen a la comisión ejecutiva para que con carácter prioritario, negocie y concluya, en un plazo máximo de noventa días, un protocolo que actualice el

marco jurídico de la ODECA, readecuándolo a la realidad y necesidades actuales. La comisión ejecutiva considerará en la negociación los proyectos que sobre institucionalidad se le hayan presentado.

Para dar un adecuado seguimiento y coordinación a la ejecución de las decisiones adoptadas en las cumbres, en cuanto a la institucionalidad centroamericana, crear como un mecanismo transitorio el consejo comunitario integrado por los ministros de relaciones exteriores y los ministros responsables de la integración económica centroamericana y desarrollo regional. Para asuntos intersectoriales, se integrará adicionalmente por los ministros de los sectores interesados.

Los asuntos específicos serán responsabilidad exclusiva del foro de los ministros respectivos. Las propuestas de este consejo comunitario serán coordinadas con los ministros de relaciones exteriores, quienes elaborarán la agenda de las cumbres de presidentes.

Instruir a las autoridades competentes, a efecto de que presenten en el plazo de noventa días, una propuesta a fin de crear un mecanismo que permita financiar en forma permanente las actividades de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

Asimismo, instruir a la comisión ejecutiva para que, tomando en cuenta a las autoridades correspondientes, en cada caso evalúe los marcos jurídicos de la gran diversidad de foros e instancias regionales, teniendo presente la posibilidad de su incorporación dentro del contexto institucional.

9. Manifestar su beneplácito por el inicio de las labores preparatorias para la instalación del Parlamento Centroamericano. Con el fin de promover la participación de todos los países de la región en el mismo y sin perjuicio de que se instale conforme a lo previsto, suscribimos un Protocolo a su Tratado Constitutivo, con el propósito de extender el plazo contemplado para la celebración de elecciones por un período de hasta treinta y seis meses, a partir de la fecha de su instalación, y permitir la participación como observadores a los países suscriptores del tratado y sus protocolos, que no hayan elegido diputados al parlamento.

10. Conscientes de la necesidad de normalizar la participación de Honduras en el esquema jurídico del programa de integración económica centroamericana, la zona de libre comercio irrestricto y como un paso para consolidar la integración regional y garantizar una adecuada inserción de Centroamérica en la economía internacional, manifestar nuestra complacencia por la suscripción del "Acuerdo Multilateral Transitorio de Libre Comercio entre el gobierno de la República de Hondu-

ras y los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica", que se incluye como anexo.

Este acuerdo debe interpretarse como el primer paso de la incorporación de Honduras al nuevo Tratado de Integración Económica Centroamericana, que deberá definirse para alcanzar esos objetivos.

11. Conscientes de la importancia y el papel que desempeñan la población rural y los productores agropecuarios en la nueva estrategia de integración regional, adoptar e impulsar el Plan de Acción para la Agricultura centroamericana (PAC), que forma parte de esta declaración como anexo.

El PAC tiene como propósitos incentivar la producción agropecuaria, consolidar el comercio intrarregional de productos agropecuarios, garantizar la seguridad alimentaria e incrementar y diversificar las exportaciones.

Instruir a los ministros responsables de la integración y a los de agricultura, para que ejecuten los acuerdos contenidos en la Sección II del PAC, a efecto de iniciar la liberalización del comercio de productos agropecuarios básicos, a más tardar el 31 de diciembre del presente año, adoptando el sistema de banda de precios, fecha en la que también deberá estar definida una política comercial uniforme, de manera que a más tardar el 30 de junio de 1992 se liberalice totalmente el comercio intrarregional de productos agropecuarios.

Reconocer al consejo de ministros de agricultura del istmo centroamericano y su secretaría (CORECA-VI), como mecanismo institucional para la vinculación del sector con los otros mecanismos de la integración económica centroamericana.

12. Aprobar la creación del consejo de ministros de salud de Centroamérica, respaldar con entusiasmo su "Iniciativa de salud de Centroamérica" e instar a la comunidad internacional a continuar brindando su apoyo y cooperación para la ejecución de dicho plan.

13. Ante el peligro que representa para nuestros pueblos la amenaza de la propagación del cólera a la región centroamericana, instruir a los ministros de salud para que sigan poniendo en práctica medidas orientadas a la prevención y combate del mismo, solicitando a las agencias internacionales especializadas continúen su apoyo técnico y financiero.

Asimismo, agradecer a los medios de comunicación y fuerzas vivas de la sociedad, su valiosa cooperación y solicitar la continuación de la misma para intensificar una campaña de higiene y salubridad.

14. Crear un Consejo Centroamericano de Vivienda

y Asentamientos Humanos, integrado por los ministros o encargados de la materia de cada uno de los países del istmo centroamericano.

15. Reafirmar que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es un organismo adecuado para la canalización de recursos externos adicionales en apoyo al desarrollo y la integración económica de la región. Al destacar los avances logrados en el fortalecimiento financiero e institucional del BCIE y, en particular la reciente incorporación de las repúblicas de China y Venezuela como socios extrarregionales, reuelven continuar dando pleno apoyo a su gestión en la región.

16. Destacar el avance de los trabajos de la Asociación para la Democracia y el Desarrollo en América Central (ADD), la cual constituye una valiosa iniciativa de países amigos, para impulsar la cooperación con el istmo centroamericano, mediante el programa para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el apoyo al desarrollo económico y social de la región. Este incondicional aporte, que complementará y adicionará la cooperación existente, compromete a los países del istmo a definir sus prioridades, por lo que encomiendan a los ministros de relaciones exteriores para que, en coordinación con las autoridades correspondientes, a la brevedad posible, identifiquen los proyectos regionales que deberán presentarse en las próximas reuniones del comité coordinador y de la asamblea plenaria.

17. Destacar la importancia de crear un foro regional de diálogo y apoyo a la integración en el que participen, además del sector gubernamental, los sectores empresarial, laboral, académico y otros interesados.

Activar la creación de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo de Centroamérica, sugerida por la comisión Sanford, para que se reúna en Managua y se constituye en un mecanismo de consulta de los gobiernos con los diversos sectores públicos y privados, para la reactivación económica de la región.

18. Al notar los avances en la ejecución del Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) en favor de las poblaciones desarraigadas de la región, exhortar a la comunidad internacional a apoyar, tanto las nuevas prioridades que exigen los cambios acaecidos en Centroamérica, como las propuestas que, a partir de las mismas, le sean presentadas en la segunda reunión internacional de su comité de seguimiento a celebrarse a comienzos de 1992.

19. Expresar su satisfacción por la propuesta formulada por la Comisión de las Comunidades Europeas, al

consejo de ministros de la misma, para aprobar el reglamento que hace extensivo a los países del istmo centroamericano el Régimen de Preferencias Generalizadas.

En este sentido, exhortar a los gobiernos de los estados miembros de la comunidad europea para que, constituidos en consejo de ministros, aprueben dicha propuesta.

20. Instruir a los ministros responsables de la integración centroamericana y a los presidentes de los bancos centrales para que consideren la adopción de un mecanismo de solución práctica, excepcional y realista, que comprenda la aplicación inmediata de un esquema de renegociación de la deuda intrarregional de Nicaragua, con intereses preferenciales y a largo plazo.

21. Impulsar una urgente actividad para proteger, mejorar, modernizar y ampliar la infraestructura de los servicios del transporte existentes en Centroamérica y dar su pleno apoyo a la propuesta presentada por los ministros responsables del transporte (REMITRAN), orientada al incremento del intercambio comercial intra-centroamericano y de las exportaciones extrarregionales.

Asimismo, solicitar que a la brevedad posible, presenten un proyecto de interconexión terrestre de Centroamérica y Panamá.

22. Considerando la importancia de la integración educativa y cultural de Centroamérica, dar su apoyo al convenio elaborado sobre esas materias por los ministros correspondientes e impulsar la suscripción definitiva de dicho acuerdo.

23. Crear la Comisión Regional de Asuntos Sociales, como parte de las cumbres de presidentes. Dicha comisión será integrada por las primeras damas de la región y se constituirá en un mecanismo orientado a contribuir a la coordinación y el seguimiento para la atención adecuada de la problemática social de los distintos sectores de la región.

En ese sentido, instruir a las diferentes instancias nacionales a efecto que den cumplimiento efectivo a los acuerdos que emanen de dicha comisión y requerir que la misma presente en las cumbres subsiguientes un informe de las actividades desarrolladas en sus respectivos países.

Tomando en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Cuadragésimo Cuarto Período de Sesiones, proclamó la celebración de 1994 como el Año Internacional de la Familia con el tema: "Familia: recursos y responsabilidades en el mundo en cambio",

encomendar a las primeras damas de Centroamérica y Panamá la coordinación nacional en la organización de las actividades para celebrar este importante evento.

24. Recibir con satisfacción y apoyar los acuerdos alcanzados en la reunión de primeras damas, contenidos en anexo, y en este contexto promover a la brevedad la adopción de medidas legislativas, administrativas y judiciales en nuestros respectivos países, a fin de combatir de manera eficaz el tráfico ilegal de menores en la región, aceptando para su consideración y análisis el documento base presentando por las primeras damas, con vista a una respuesta a este grave problema, atentatorio de los derechos tutelados en la "Convención sobre los derechos del niño" de las Naciones Unidas.

25. Apoyar e impulsar el proyecto "Sistema de interconexión eléctrica países de América Central" (SI-PAC), recientemente reformulado. Asimismo, la realización del estudio de prefactibilidad para la interconexión eléctrica de los países del istmo centroamericano, Colombia, México y Venezuela.

26. En vista de la creación de la Comisión Permanente Sobre Narcotráfico, instruir a la comisión ejecutiva para que gestione recursos para el buen funcionamiento de la secretaría ejecutiva de dicha comisión.

27. Expresar satisfacción por el eficiente trabajo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que ha permitido avances efectivos en la protección del medio ambiente en el área. En tal sentido, instruir a la comisión ejecutiva para que, a la brevedad, analice y resuelva los proyectos que le han sido presentados sobre el tema y que se detallan en anexo e instruir a las autoridades responsables de los recursos naturales de la región, la pronta y plena aplicación del Plan Forestal Tropical para Centroamérica.

28. Aprobar los siguientes parámetros para la negociación arancelaria, acordados por los ministros responsables de la integración económica y desarrollo regional:

1. Los niveles arancelarios al 31 de diciembre de 1992, fecha de entrada en vigencia del arancel uniforme centroamericano, tendrán un techo del 20 por ciento y un piso no menor de 5 por ciento con franjas intermedias del 10 por ciento y 15 por ciento.

2. Los países acordarán una lista de productos esenciales que tendrán un tratamiento especial uniforme. Asimismo, se tendrán un tratamiento especial uniforme. Asimismo, se elaborará una lista limitada de excepciones de bienes de carácter fiscal que podrán tener un arancel superior al 20 por ciento.



3. Congruente con las políticas macroeconómicas de los países, se definirá una lista reducida de productos que alcanzarán los niveles arancelarios acordados, a más tardar el 31 de diciembre de 1994, para los cuales se establecerá un programa de desgravación.

De ameritarlo y previo dictamen de la SIECA, se podrán establecer medidas compensatorias tendientes a reestablecer las relaciones de competitividad.

Asimismo, urgimos a los ministros responsables de la integración económica centroamericana y desarrollo regional, el cumplimiento del Programa de Desmantelamiento de los Obstáculos al Comercio Intracentroamericano, contenido en el "Acuerdo Modificatorio del Convenio de Financiación ALA 89/12" con la Comunidad Económica Europea, que figura como anexo, relativo al Sistema Centroamericano de Pagos, dentro de los plazos ahí acordados.

29. Conducir las negociaciones con México dentro de los criterios y parámetros fijados previamente en los acuerdos firmados en Tuxtla Gutiérrez. Centroamérica actuará como región por medio de la Comisión de Complementación Económica México Centroamérica, sin perjuicio de los avances bilaterales que puedan lograr los países individualmente.

Estos avances deberán ser informados a la Comisión, para que el propósito de una convergencia hacia un área de libre comercio se lleve a cabo.

Manifestar nuestro beneplácito por la suscripción de las bases conducentes a un "Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión entre Venezuela y los Países Centroamericanos", abierto a la adhesión de la República de Panamá, que consagra el principio de asimetría en una perspectiva generosa, tomando en cuenta el desarrollo relativo entre las partes contratantes y que contribuye a acelerar la integración latinoamericana y a lograr una mayor competitividad internacional de las economías de la región, y a facilitar el desarrollo integral de nuestras sociedades.

Ratificar la necesidad de acelerar las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos de América, de tal manera que los países de la región centroamericana, sean beneficiados con los postulados de la Iniciativa para las Américas. En tal sentido, solicitamos a los Estados Unidos de América que las negociaciones conducentes a la celebración de acuerdos de libre comercio entre los países centroamericanos y ese país, se lleven a cabo rápidamente dentro de los límites concedidos al ejecutivo por el Congreso norteamericano, llamado vía rápida legislativa (*fast track legislation*). Centroamérica actuará como región, sin perjuicio de los avances bilate-

rales que puedan lograr los países individualmente. Dichos avances deberán ser informados a los ministros responsables de la integración. Centroamérica insta a Canadá a participar en las iniciativas de liberalización de comercio que los Estados Unidos de América y México han ofrecido a Centroamérica.

Resaltar los esfuerzos del gobierno de Colombia por intensificar la cooperación con Centroamérica y abrir el mercado colombiano a productos de exportación de la región centroamericana.

30. Reconocer con satisfacción, la respuesta positiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), referente a la creación de un grupo consultivo de apoyo a la región centroamericana y lo exhortan a que continúe con los estudios y análisis necesarios para el avance de dicho grupo. Asimismo aplaudir la iniciativa del Presidente del BID, señor Enrique Iglesias, de brindar apoyo a las diversas instituciones que sirven a la región.

31. Manifestar nuestra complacencia por los avances realizados a nivel de las diferentes instancias, foros y organismos involucrados en el proceso de integración económica, detallados en el "Informe de avance de los mandatos de las cumbres de presidentes de Centroamérica", presentado por los ministros responsables de la integración y desarrollo regional y que se incluye como anexo de la presente declaración.

32. Destacar la importancia de la Primera Cumbre Iberoamericana, a celebrarse en Guadalajara, México, para buscar caminos que permitan establecer estrategias para hacer más sólida y fructífera la relación de cooperación entre los países iberoamericanos, dando a Centroamérica un nuevo ámbito de proyección de sus metas e intereses.

33. Reconocer la importancia de fortalecer los vínculos de Centroamérica con otras sub-regiones y, en ese sentido, resaltar con satisfacción la celebración de la próxima reunión ministerial Centroamérica-CARICOM, programada para la segunda quincena de noviembre del presente año en San Pedro Sula, Honduras, en la cual se abordarán, de manera prioritaria, temas de cooperación y de comercio interregional.

34. Acoger con beneplácito los acuerdos de la primera reunión de los ministros de planificación y la segunda de ministros de trabajo de Centroamérica y Panamá, instándolos a continuar con sus esfuerzos al logro de sus objetivos.

35. Recibir con especial interés los planteamientos de la Comisión Regional de Pequeños y Medianos Productores para la Seguridad Alimentaria Centroamericana, e instruir a las instancias correspondientes a efecto

de que se proceda a su pronta consideración y análisis, a fin de buscar una respuesta adecuada a la problemática considerada en los mismos.

36. Apoyar los trabajos de la Universidad para la Paz y hacer un llamado a la comunidad internacional para que respalde la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, señor Javier Pérez de Cuéllar, a fin de fortalecer este organismo internacional con sede en la región, por medio de un fondo para la paz.

37. Tomar nota con satisfacción del acuerdo suscrito por los ministros de relaciones exteriores para la coordinación de candidaturas en organismos internacionales, incluidos los centroamericanos.

38. Destacar la importancia que reviste para la región la postulación del doctor Bernd Niehaus Quesada, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, para optar al cargo de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos; por lo que deciden otorgar su pleno respaldo a dicha aspiración, como una muestra de la solidaridad y del espíritu de fraternidad que impera en la región centroamericana.

En este sentido, los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, instruyen a sus ministros de relaciones exteriores, para que inicien en forma coordinada las gestiones necesarias para la promoción de tan relevante candidatura, en el marco integracionista y de la nueva proyección del istmo centroamericano a nivel internacional.

39. Reunirse en la República de Honduras el 12 y 13 de diciembre del presente año y considerar preferentemente la temática social, a efecto de impulsar el diseño y ejecución de un "Programa regional para la reducción de la pobreza", integrando la dimensión del mejoramiento del desarrollo humano, con la de elevar la capacidad productiva y el ingreso de los grupos más vulnerables.

40. Los presidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá agradecieron al Presidente de El Salvador, Licenciado Alfredo F. Cristiani Burkard, y por su intermedio al gobierno y al pueblo salvadoreños, la hospitalidad y las atenciones recibidas, que contribuyeron decisivamente al éxito de la reunión.

San Salvador, República de El Salvador, 17 de julio de 1991.

Rafael Angel Calderon Fournier  
Presidente  
República de Costa Rica

Jorge Serrano Elías  
Presidente  
República de Guatemala

Rafael Leonardo Callejas Romero  
Presidente  
República de Honduras

Violeta Barrios de Chamorro  
Presidente  
República de Nicaragua

Alfredo F. Cristiani Burkard  
Presidente  
República de El Salvador

Guillermo Endara Galimany  
Presidente  
República de Panamá

*Testigo de Honor:*  
Patricio Aylwin Azócar  
Presidente  
República de Chile

## 1.2. Apoyo total a la paz de El Salvador.

Los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, reunidos en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, los días 15, 16 y 17 de julio de 1991, con el objeto de analizar la situación prevaleciente en el área y definir el mecanismo institucional adecuado para alcanzar efectivamente la integración centroamericana en lo político, económico, social y cultural.

*Tomando en cuenta* el resultado de los esfuerzos realizados en la búsqueda de la paz y el bienestar económico y social de nuestros pueblos, mediante el respeto a los derechos humanos, la reconciliación nacional y el diálogo, la consolidación de la democracia, y el fortalecimiento de sus instituciones, del Estado de derecho y de los mecanismos conducentes a la creación de un clima de confianza, cooperación y seguridad.

*Considerando* que los cambios y transformaciones acaecidos en los últimos años en el mundo, sitúan a Centroamérica en una etapa histórica que implica una renovada visión de su propio proceso de integración y de su inserción en un orden mundial caracterizado por la interdependencia, el surgimiento de nuevas formas de integración y cooperación y una aplicación efectiva del derecho internacional.

*Persuadidos* de que es necesario continuar con todos esos esfuerzos e incorporar activamente a Centroamérica en el nuevo orden internacional.

*Acuerdan:*

1. Reafirmar su compromiso de continuar cumpliendo irrestrictamente con los acuerdos de Esquipulas, cuyos mecanismos han permitido avances significativos en la pacificación y la democratización, condiciones indispensables para el pleno disfrute de la libertad, en un marco de justicia y de impulso al desarrollo.

2. Reiterar su convicción de que la legitimidad del poder público emana de la voluntad popular libremente expresada en los procesos electorales.

3. Condenar enérgicamente la violencia, el terrorismo y los actos de desestabilización que atentan contra los procesos democráticos, así como el recurso a medios violentos para alcanzar objetivos políticos.

4. Los presidentes de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, expresan nuevamente su reconocimiento y decidido apoyo al gobierno de El Salvador y a su Presidente Alfredo Cristiani, por los esfuer-

zos y medidas adoptadas para el fortalecimiento del proceso de democratización de dicho país, evidenciado por la existencia de un amplio diálogo político, las elecciones de marzo recién pasado, la integración de una asamblea legislativa ampliada y totalmente pluralista, y por el inicio del proceso de reforma constitucional orientado, principalmente, a reafirmar la supremacía del poder legítimamente constituido, establecer mecanismos de garantía para los derechos humanos, fortalecer el poder judicial y la administración de justicia y perfeccionar los procesos electorales. Asimismo, por su firme voluntad de continuar buscando la paz, la reconciliación nacional y la solución política al conflicto interno de dicho país.

Reiterar nuevamente la condena a los actos de violencia y terrorismo por considerar que no tienen justificación alguna y, estando plenamente enterados del desarrollo del proceso de diálogo-negociación y firmemente convencidos de que existen las condiciones necesarias para ello, demandar, para el bien de Centroamérica y bajo la verificación de la Organización de las Naciones Unidas, el desarme y desmovilización del FMLN, a fin de que se incorpore, dentro de un marco de plena legalidad a la vida civil, institucional y política de El Salvador.

Centro América unida para la paz,  
la libertad, la democracia y el desarrollo.

San Salvador, El Salvador, julio de 1991.

### 1.3. Declaración de Guadalajara.

Los jefes de Estado y de gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, reunidos en la ciudad de Guadalajara, México, los días 18 y 19 de julio de 1991, hemos acordado emitir la siguiente declaración:

1. Con especial beneplácito nos hemos congregado, por primera vez en la historia, para examinar en forma conjunta los grandes retos que confrontan nuestros países en un mundo en transformación. Nos proponemos, por ello, concertar la voluntad política de nuestros gobiernos para propiciar las soluciones que esos desafíos

reclaman y convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales que nos enlazan en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad.

2. Representamos un vasto conjunto de naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de pueblos, credos y sangres diversos. A quinientos años de distancia de nuestro primer encuentro, y como uno de los grandes espacios que configuran el mundo de nuestros días, estamos decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra comunidad.

3. Reconocemos que este propósito de convergencia se sustenta no sólo en un acervo cultural común, sino,



asimismo, en la riqueza de nuestros orígenes y de su expresión plural. Nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. En este marco, se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia, sus sistema político y sus instituciones.

4. Encontramos en la aproximación respetuosa de nuestras diferencias y en la voz múltiple de nuestras sociedades, las bases de un proyecto de cooperación iberoamericana sustentado en el diálogo, la solidaridad y la adopción de acciones concertadas.

5. Manifestamos la voluntad de contribuir unidos a un futuro común de paz, mayor bienestar e igualdad social. Estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, la plena vigencia de los derechos humanos, la ampliación de los cauces democráticos, el fortalecimiento de nuestros sistemas institucionales y el respeto de las normas de derecho internacional.

6. Deseamos un futuro de certidumbre, paz y seguridad para nuestros pueblos. Ello sólo será posible mediante el respeto al derecho internacional y a través del desarme general y completo que desaliente el uso de la fuerza y propicie la solución negociada de controversias. Reafirmamos nuestro apoyo a las metas para la década de las Naciones Unidas contra el colonialismo. Frente al abuso del poder, invocamos la razón y el diálogo.

7. Reafirmamos que es obligación del Estado de derecho promover y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. A partir de nuestros propios esfuerzos y sobre la base de una cooperación internacional amplia, no selectiva y no discriminatoria, estamos decididos a conformar un acervo iberoamericano en el ámbito de los derechos humanos que consolide conductas de respeto, libertad y armonía en lo político, lo jurídico, lo económico y lo social.

8. Reconocemos la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural.

9. Estamos comprometidos en un proceso de profundo reajuste de nuestras economías con el objeto de lograr con eficiencia la recuperación y el crecimiento. Nuestros países han hecho avances significativos en sus procesos de modernización por medio de la reforma del Estado y de la liberalización económica. Tales procesos

han entrañado sacrificios que deben cesar para que sea posible establecer una verdadera justicia social. En nuestra región se han dado procesos sin precedente tendientes a la integración económica gradual regional y subregional que hagan posible una posición más favorable en el escenario internacional. Nuestras iniciativas se verán fortalecidas si existe un entorno internacional que facilite recursos complementarios para el desarrollo y la supresión de obstáculos al intercambio comercial.

Manifestamos nuestro decidido apoyo a los procesos de integración en curso tanto a nivel regional como subregional y nos proponemos seguir avanzando en este camino. Reiteramos que estos esfuerzos de integración son abiertos al resto del mundo.

La persistencia de la actual situación puede llevar a que se sustituya el bipolarismo ideológico por una división entre el norte, rico en capitales y tecnología, y el sur, pobre y sin perspectivas. Para superar el problema es necesario, por un lado, desarrollar formas efectivas de reciprocidad y solidaridad por otro, fundamentarlas en una propuesta ética, guiada por la justicia social y por la libertad y que impulse, con nuevos esquemas, una verdadera cooperación entre los países del mundo.

10. Desplegaremos todos los esfuerzos necesarios para liberar a nuestros pueblos antes del siglo XXI del flagelo de la miseria. Para ello, procuraremos el acceso general a servicios mínimos en las áreas de salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad social, de acuerdo con las metas establecidas por las Naciones Unidas en las Estrategias Internacionales del Desarrollo. Así contribuiremos al fortalecimiento de la democracia en nuestra región.

11. Reafirmamos que la deuda externa es uno de los principales obstáculos para el crecimiento y estabilidad de la región y que en consecuencia constituye, para muchos de nuestros países, un factor fundamental del desarrollo económico de evidente dimensión política.

12. Reconocemos que nuestras aspiraciones de desarrollo económico, social, tecnológico y cultural requieren de un impulso decidido a la educación y a la cultura que a la vez que fortalezca nuestra identidad nos permita bases sólidas para asegurar la inserción adecuada de nuestros países en un contexto internacional caracterizado por la innovación científica y tecnológica.

Es necesario acortar la brecha tecnológica utilizando la tecnología básica para atender los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vivienda. La transferencia de tecnología debe responder a criterios sociales y no exclusivamente de bases mercantiles.

13. Ante el deterioro ecológico global, íntimamente

ligado a modelos de desarrollo que han prevalecido hasta hoy, principalmente en los países industrializados, requerimos un esfuerzo renovador en el ámbito de la cooperación multilateral. Ello permitirá eliminar este deterioro y superar la pobreza. Es indispensable que dicha cooperación internacional establezca mecanismos eficaces de transferencia de recursos financieros adicionales y de tecnologías apropiadas en condiciones preferenciales y no comerciales para los países en desarrollo teniendo en cuenta que la responsabilidad de la solución debe recaer básicamente en aquellos que más contribuyen a generar el daño. Estos mecanismos deben contener modalidades innovadoras fundamentadas en la administración soberana de los recursos naturales y en la promoción del crecimiento económico. Asimismo, se deben establecer las bases de un régimen jurídico global convencional que contemple los aspectos indisociables del desarrollo y de la preservación de la naturaleza. La actual desigualdad del sistema económico internacional y sus consecuencias para gran parte de la humanidad que vive en la pobreza, requieren la creación de un nuevo orden para el medio ambiente sano y equilibrado.

14. Nos comprometemos a desplegar los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a las metas definidas en la cumbre mundial en favor de la infancia. Para ello impulsaremos la formulación de los programas nacionales de acción destinados a promover la supervivencia, la protección y el desarrollo integral de la niñez iberoamericana.

15. Las deficiencias del desarrollo se reflejan en el costo que representan la muerte y la enfermedad en nuestros países, particularmente para aquellos sectores más vulnerables de la población. Conscientes de las condiciones de alto riesgo que han llevado a brotes epidémicos como el cólera, cuya magnitud ha creado una situación de emergencia, manifestamos nuestra voluntad de cooperación a fin de superarlas y lograr mejores niveles de salubridad y de vida.

16. Frente al flagelo del narcotráfico y sus secuelas, afirmamos el principio de la responsabilidad compartida y reiteramos nuestro compromiso de fortalecer la cooperación internacional para su erradicación, basada en una perspectiva integral y multilateral con pleno respeto a la soberanía de los estados.

17. En un mundo en el que se perfila la formación de grandes conglomerados regionales, dinámicos y competitivos, el aislamiento y la incomunicación son causa de pobreza, marginación y atraso. Requerimos de una mayor fuerza colectiva que atenúe la vulnerabilidad y los riesgos de la dispersión.

18. Ante la pobreza, la guerra, la intolerancia, el hambre, la enfermedad, la degradación del medio ambiente y la ignorancia, proponemos una nueva cultura de cooperación internacional como única vía para un mundo justo y estable. Entendemos ésta como una verdadera operación conjunta en la que confluyan intereses y objetivos compartidos entre las naciones de Iberoamérica que trasciendan el simple dar y recibir.

19. Aspiramos por ello a convertirnos en un interlocutor pleno en el escenario mundial. A partir de nuestras coincidencias hemos decidido emprender iniciativas para superar los desafíos que enfrentamos y unir nuestras voluntades ante las más apremiantes cuestiones globales.

20. Asumimos que nuestro acercamiento se enriquece con la diversidad de experiencias que están teniendo lugar y abre nuevas posibilidades de diálogo y entendimiento con todas las regiones del mundo. Por lo tanto, la intensificación de la cooperación iberoamericana no excluye ni sustituye los esquemas de integración y concertación regionales y subregionales en los cuales actuamos.

21. Al final del siglo XX se configura el surgimiento de un nuevo esquema de organización de las relaciones internacionales. Sin embargo, sus rasgos fundamentales están aún por definirse; no podemos esperar el cambio pasivamente, debemos actuar para conformarlo, tenemos intereses genuinos que deben ser reafirmados e impulsados.

22. Sólo una sociedad internacional regida por el derecho puede asegurar la paz y la seguridad para todos los pueblos. En esa tarea deberá desempeñar un papel esencial la Organización de las Naciones Unidas, unas Naciones Unidas revitalizadas y renovadas y a las que la nueva situación internacional debe facilitar la consecución efectiva de los fines para los que fueron creadas.

El fortalecimiento de las bases de convivencia y justicia internacionales conforme a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, es una responsabilidad compartida por todos los estados y no prerrogativa exclusiva de algunos. Se trata de un proceso que debe ser abierto y participativo, en el cual se hagan valer los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Estamos decididos a aportar nuestra contribución.

23. La interdependencia de los desafíos que enfrenta la humanidad nos obliga a conjugar esfuerzos para superarlos. Lograrlo requiere el estricto apego a las

normas fundamentales del derecho internacional, así como a su desarrollo progresivo en las nuevas áreas, resultado de los procesos de integración y globalización.

24. Reafirmamos la fuerza de nuestra cultura que se ve enriquecida por nuestra participación en los procesos de integración y globalización.

Los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica nos comprometemos a realizar consultas para alentar una cooperación más amplia y acrecentar los intercambios que nos permitan impulsar políticas comunes que promuevan el óptimo aprovechamiento de las ventajas que se derivan de la pertenencia a una misma comunidad. Nos hemos fijado los siguientes objetivos:

## **I. Vigencia del derecho internacional**

a) Guiar la conducta externa de nuestros países sobre la base del derecho internacional y actuar en forma conjunta y coordinada para contribuir a eliminar el uso o la amenaza del uso de la fuerza.

b) Promover decididamente los procesos de negociación para la solución de conflictos regionales y apoyar iniciativas en materia de control, reducción y tráfico de armamentos. Respalda en ese sentido los procesos de negociación en Centroamérica tendientes a establecer una paz justa, firme y duradera y a ese efecto nos comprometemos a abstenernos de cualquier acción o medida que obstaculice la pronta solución de los conflictos y exhortamos en ese mismo sentido a todos los miembros de la comunidad internacional.

c) Impulsar el derecho al desarrollo y el establecimiento de relaciones económicas internacionales más justas y equitativas.

ch) Participar activamente en la reestructuración de los foros multilaterales, en particular del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar un orden internacional más justo y democrático que garantice la paz y promueva el bienestar de los pueblos.

d) Promover el fortalecimiento de la democracia y del pluralismo en las relaciones internacionales, con pleno respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los estados, así como la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos.

e) Propiciar consultas sobre el desarrollo y la codificación del derecho internacional sobre la base de un proceso consensual y orientado hacia aquellos temas, que por su carácter global presentan una mayor urgencia. Merecen atención prioritaria el fortalecimiento de los mecanismos de solución pacífica de controversias, normas aplicables en conflictos armados, promoción del desarme convencional, nuclear y de armas de destruc-

ción masiva, vigorización de los instrumentos de protección de los derechos humanos, definición del marco jurídico para la defensa del medio ambiente, combate al narcotráfico, derecho del mar y del espacio exterior y transferencia de tecnología.

f) Fortalecer la cooperación entre gobiernos y entidades de la sociedad civil y organismos multilaterales competentes en materia de derechos humanos, y fomentar la plena adhesión a los instrumentos internacionales de promoción y protección de estos derechos tanto de carácter universal como regional.

g) Adoptar el compromiso de crear y en su caso consolidar, en nuestros respectivos países, mecanismos nacionales de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como establecer una cercana colaboración entre los mismos.

## **II. Desarrollo económico y social**

h) Fortalecer el sistema multilateral de comercio internacional impulsando una mayor comunicación, y en su caso colaboración, entre los diferentes esquemas de integración y cooperación en los que participan, tanto en América como en Europa, los países iberoamericanos a fin de garantizar una economía mundial abierta.

i) Contribuir al éxito de la ronda Uruguay del GATT, al cumplimiento pleno de sus reglas y objetivos, a la lucha contra el proteccionismo, al rechazo de la discriminación en el comercio internacional y a la justa reciprocidad para los países que realizan esfuerzos unilaterales y regionales de apertura comercial.

j) Definir modalidades realistas y pragmáticas, que permitan reinscribir las cuestiones del desarrollo económico y de la cooperación internacional en la agenda multilateral.

k) Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales que contribuyan adecuadamente a promover de manera definitiva el ejercicio pleno de los derechos y la incorporación en completa igualdad de la mujer a la sociedad.

l) Alentar encuentros de los agentes económicos en Iberoamérica con el fin de intercambiar experiencias y fomentar mayores vínculos entre ellos aprovechando ventajas comparativas mutuas para el comercio, la inversión y el desarrollo tecnológico. Para tal fin se podría estimular el establecimiento de una organización empresarial iberoamericana.

ll) Se propone la creación de un fondo iberoamericano con el apoyo de organismos internacionales, para el desarrollo de los pueblos indígenas, que permita resolver favorablemente los acuciantes problemas de los

pueblos originarios al margen de cualquier sentido de "reservas indígenas" o de compensaciones paternalistas.

m) Apoyar, a propuesta del presidente de México, la candidatura del señor Carlos Solchaga de España como presidente del Comité Interino del Fondo Monetario Internacional.

n) Asegurar que las medidas de control, reducción y eliminación de armas de destrucción masiva no obstaculicen el acceso legítimo a tecnologías avanzadas para uso pacífico, indispensables, para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

o) Impulsar soluciones al deterioro ambiental sobre la base del pleno respeto de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y a sus políticas ecológicas, tomando en cuenta que la responsabilidad de los países es proporcional a la medida en que han contribuido a tal degradación. Llamamos en particular la atención sobre la necesidad de prevenir por medios internacionales el uso y transferencia de tecnologías contaminantes. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo constituye una oportunidad singular para que se amplíe la cooperación internacional para el desarrollo y se revierta el proceso global de degradación de la naturaleza.

p) Promover programas de cooperación a corto plazo de lucha contra el narcotráfico, de acuerdo con los instrumentos internacionales vigentes, por medio de intercambio de información, la fiscalización de activos monetarios de procedencia ilícita y el control de la producción y venta de precursores químicos.

q) Demandar a los países consumidores que intensifiquen sus acciones tendientes a la erradicación del uso de drogas.

r) Requerir a los países industrializados y a los organismos internacionales que brinden su apoyo económico y financiero para permitir a todos los estados afectados por el narcotráfico llevar a cabo programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, así como el fortalecimiento de sus sistemas judiciales y administrativos. Una de las modalidades más eficaces de compensación de los costos socio-económicos generados por esta lucha, es la apertura de mercados para los países en desarrollo que emprendan los citados programas.

s) Otorgar atención a los problemas de salud y, en especial, a los de salud preventiva. Damos pleno respaldo a la elaboración de un plan de emergencia para la prevención y control del cólera en Iberoamérica y para inversiones de mediano y largo plazo orientadas a reducir las carencias en materia de abastecimiento de agua potable y el tratamiento adecuado del agua usada.

t) Proponer a los organismos internacionales de crédito la factibilidad de prestar ayuda a los países de la región en sus planes agrarios.

### III. Educación y cultura

u) Identificar las áreas educativas que de acuerdo a cada país presenten ventajas comparativas y de las que pudieran derivarse beneficios para la región iberoamericana como países individuales o en su conjunto y, en función de sus prioridades, diseñar programas específicos de cooperación, sea a nivel bilateral o multilateral.

v) Promover un mercado común del conocimiento como un espacio para el saber, las artes y la cultura, liberalizando los intercambios de materiales culturales, didácticos y educativos; facilitando el intercambio y la provisión de equipamiento científico y tecnológico; y creando incentivos para la comunicación y transmisión de conocimientos. De igual manera, nuestros países deberían destinar, dentro de sus posibilidades, recursos a la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo tecnológico destinado a fortalecer la capacidad de generación de innovaciones para reforzar la competitividad industrial y la eficiencia social.

w) Fomentar encuentros iberoamericanos de expertos en las diversas áreas del pensamiento y la creación cultural. Invitar a cada país de la región a fundar una biblioteca iberoamericana como eslabón de cultura, esencia de nuestra comunidad.

x) Intensificar los vínculos entre instituciones iberoamericanas de educación superior.

y) Ampliar los programas de intercambio cultural y de becas.

z) Impulsar el aprovechamiento de los sistemas de comunicaciones por satélite que existen en la región, lo que contribuiría a mejorar los vínculos entre los países de Iberoamérica.

Para alcanzar los objetivos antes mencionados hemos decidido establecer un diálogo al más alto nivel entre los países de Iberoamérica. Los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Guadalajara, México, hemos decidido constituir la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno con la participación de los estados soberanos de América y Europa de lengua española y portuguesa. Para ello nos reuniremos inicialmente en España el año próximo, en Brasil en 1993, en Colombia en 1994 y en Argentina en 1995. La celebración de estas reuniones permitirá avanzar en un proceso político, económico y cultural a partir del cual nuestros países podrán lograr juntos una mejor y más eficiente inserción en un contexto global en plena transforma-



ción. Expresamos la conveniencia de intercambiar información sobre el avance de los objetivos de esta declara-

ción antes de la próxima cumbre.

## **2. Relaciones cívico-militares.**

### **2.1. René Emilio Ponce. Nuestra visión de las relaciones cívico-militares en la consolidación de la democracia.**

El mundo vive momentos de cambio, de rescate de los mejores valores de la humanidad y del establecimiento de sistemas democráticos pluralistas y funcionales, como imperativo generacional y de cara al próximo siglo.

Un conocido autor que hoy es nuestro anfitrión, hace más de diez años en su libro "Nuevos rumbos para el desarrollo constarricense", expuso ideas muy valiosas al decir:

"Ninguna persona, ni ningún grupo de personas, debe ser dueño de tanto poder como para permitirle imponer su voluntad, porque toda clase social que adquiere poder ilimitado y sin control, llega aun sin proponérselo, a abusar, tarde o temprano de él. De ahí la importancia de distribuir más racionalmente el poder político, mediante la creación de múltiples centros de influencia llamados a mantener el equilibrio que evita la dominación de unos grupos sobre otros".

El Salvador, luego de recorrer la historia dolorosa de nuestros últimos años, ha iniciado una nueva etapa donde hay cabida para la libre y pacífica expresión de todas las opiniones, además, lo que es más importante, nuestro pueblo puede ahora hacer uso de su derecho de escoger libremente en todo el conglomerado social a quienes merecen más su confianza, es decir, aquellos ciudadanos que tienen las cualidades de probidad, capacidad y moralidad.

Hoy en El Salvador, el libre debate que ilustra las materias, difunde los conocimientos y las ideas, confronta las posiciones para establecer el equilibrio del poder, vemos, con fundadas esperanzas, la participación de representantes de distintas corrientes ideológicas en el ejercicio del gobierno y con profunda satisfacción, la vivencia de las libertades por parte de la ciudadanía. Esto es una prueba inequívoca de que hemos comenzado a vivir la democracia, cuyo fundamento es que la solución de los problemas nacionales no debe buscarse por medios violentos, sino que, deberán ser el resultado del libre juego de las ideas, garantizado mediante el ejercicio de los derechos fundamentales y del poder,

con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la república.

Los derechos humanos no son parte de un discurso político, sino que constituyen una doctrina social: los males no se curan con más males, si hemos de volver la vista hacia atrás, no debemos hacerlo para recrudecer los odios y resentimientos que nos agobian, sino para aprovecharnos de las saludables lecciones, que nuestra historia nos ofrece en sus sangrientas páginas. Como dijera un conocido estadista, "debemos mirar más hacia el futuro que nos une, que al pasado que nos separa".

La convivencia pacífica en una sociedad exige el sometimiento a un orden jurídico en el que los derechos absolutos no corresponden ni a gobernantes ni a gobernados.

Ahora estamos firmemente convencidos de que un pueblo tiene justicia cuando ejerce sus derechos no por una concesión de la autoridad y cumple sus deberes, no por el autoritarismo opresor de la violencia y el despotismo, sino por el ejercicio de la autoridad apegado al ordenamiento jurídico, para alcanzar el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

La sociedad salvadoreña ha iniciado un proceso de modernización, comenzando con la delimitación funcional de sus componentes. Nuestras instituciones se reestructuran y van asumiendo el papel que a cada una corresponde en el quehacer nacional, para que unas no se equivoquen haciendo y otras no se equivoquen dejando de hacer.

Para la consolidación de la democracia, los civiles y los militares, no sólo en El Salvador, tenemos un desafío común: la adopción de nuevos roles en la nueva sociedad: los civiles a ejercer un liderazgo efectivo y competente, y los militares a apoyar profesionalmente ese liderazgo, que nuestro pueblo confiere a sus gobernantes a través del voto.

Nuestro modelo parte de un elemento fundamental que se va acentuando: la subordinación de la institución militar al poder político civil, quien posee la autoridad



legítima y ejerce las funciones de mando y control sobre el instituto castrense.

Este elemento supone la asunción por las élites civiles de las responsabilidades de conducción del gobierno y la no intervención de la institución militar en las mismas.

Es así como se reconcilian democracia y Fuerza Armada, pues no hay fuerzas armadas efectivamente profesionales, si no hay democracia y difícilmente puede haber democracia sin fuerzas armadas profesionales.

La democracia determina no solamente la subordinación política de la Fuerza Armada ante la voluntad democrática establecida, sino también la subordinación profesional ante las autoridades estatales designadas democráticamente; es así como a la institución militar corresponde obedecer las políticas de las autoridades civiles, porque además estamos de acuerdo con la esencia de esas órdenes y con el derecho de las autoridades de dictarlas. Estas son las nuevas relaciones que han de conformarse entre las autoridades civiles y las fuerzas armadas.

Nuevas relaciones también deberán configurarse entre las fuerzas armadas y el resto de la sociedad. Un concepto innegable es que las fuerzas armadas deben preocuparse de lo que ocurre en el conglomerado social, sumándose en el esfuerzo común para solucionar sus problemas, sin adoptar un papel prepotente y acaparador, sino conducido y acorde a su función. Las fricciones han sido normalmente producto de una mala comprensión, entre los estamentos civiles y militares, como resultado de una mala comunicación. No puede haber una verdadera integración sin comprensión y esta sólo es posible con una adecuada y honesta comunicación. Cabe destacar mi satisfacción por tener la oportunidad de participar en un foro como este, con tan distinguidos académicos, políticos, empresarios y profesionales; humildemente, queremos comenzar a compartir con ustedes sus virtudes, y que conozcan y nos ayuden a descubrir las nuestras.

Nuestro hombre de armas, antes y más que de armas es un hombre, sobre el cual queremos seguir trabajando para terminar de moldearlo.

Los nuevos roles y las nuevas relaciones pasan por la instauración de un sistema político estable, basado en el derecho, la moralidad, la honestidad y el trabajo eficiente y el resto de esta estabilidad habrá de fortalecer las capacidades de las instituciones políticas civiles, para que manejen satisfactoriamente las cosas del Estado, y a la vez, terminara con la práctica antidemocrática de llegar a "golpear las puertas de los cuarteles", en busca

de aliados militares a fin de que intervengan en los conflictos políticos consecuencia de ello será también que la comunidad militar podrá convivir con la civilidad, sin desconfianza o recelo alguno, de su infiltración o de intentos de su manipuleo o instrumentalización. Por esto creemos que las relaciones de la Fuerza Armada, que está inmersa en el Estado y en la sociedad, se hallan condicionadas por las relaciones políticas entre las fuerzas sociales y por la naturaleza del régimen político establecido por la constitución.

Los acontecimientos han demostrado, no sólo en El Salvador, que el diseño e implementación de un modelo democrático estable no es cosa fácil y libre de sufrimientos, pero nadie puede válidamente argumentar en los actuales momentos históricos, que haya un modelo mejor y que no valga la pena luchar por ello.

Sobre tales bases las fuerzas armadas de paz para el futuro tendrán como función fundamental ser un factor de apoyo. Haremos todos los esfuerzos para que en el futuro las fuerzas armadas no sean un conjunto de hombres acuartelados y aislados de la sociedad. Las unidades de esa fuerza de paz, siempre operativas, estarán diseñadas para las necesidades reales de la población y estarán ubicadas, en el número requerido ahí donde se les necesite, con una misión no de guerra sino de paz, de orden, de garantía y de moralidad. Este nuevo concepto, lejos de minusvalorar o devaluar al ejército en su misión histórica, lo eleva y le adjudica responsabilidades más delicadas, lo que hace concluir que en él, solo tendrán cabida hombres de reconocida capacidad y solvencia moral, sobre lo cual se les dará una educación especial de carácter académico.

La integración cívico-militar refuerza el poder político de un Estado, aumenta el poder nacional. Es así como se determina no la segregación y el aislamiento sino la integración de voluntades, inteligencias, propósitos y coordinación de esfuerzos para el logro y mantenimiento de los objetivos nacionales, en un marco de asunción responsable, comprensión, aceptación y respeto de los roles específicos que a cada actor corresponde desarrollar en el quehacer del país. Es así como la defensa de la nación va más allá de la responsabilidad puramente militar. Una política de defensa efectiva, incluye la preparación para encarar no sólo amenazas actuales o coyunturales, sino otras posibles amenazas, involucrándose elementos económicos, sociales, políticos e internacionales, para la salvaguardia de los valores esenciales del hombre.

Si bien para la determinación de las políticas militar y defensa, como acontece con otras políticas públicas, es esencial disponer de los conocimientos profesionales

que permitan adoptar políticas bien informadas, las decisiones deben estar sujetas a los mecanismos de control democrático. De consiguiente, si de alguna autonomía han de gozar las instituciones militares, esta ha de ser la motivada por la forma organizativa profesional y la complejidad técnica creciente que deben manejar en sus funciones rutinarias.

La dinámica del desarrollo de la sociedad salvadoreña nos ha encaminado en un proceso irreversible que se consolida inexorablemente y nos lleva a la concertación y la convivencia pacífica que nos obliga a ser más tolerantes, menos radicalizados, más democráticos y menos impositivos.

Probablemente la particular importancia de nuestro país de tener un conflicto bélico interno, agravado por el sensacionalismo de los tiempos actuales y unos medios de comunicación que nunca imaginamos, ha llevado a muchos a ignorar o a conceder menor importancia al desarrollo de un proceso democrático que arranca desde 1982. Es más, debe destacarse el quizás extraño caso, de gobierno legítimos que con el apoyo de su ejército legítimo, han tenido en condiciones adversas, que cumplir y hacer cumplir las obligaciones constitucionales y, bajo tales circunstancias, no han vacilado en continuar impulsando el proceso democrático, al propiciar el desarrollo de eventos electorales celebrados en una encomiable normalidad, que necesita además de un clima absoluto de libertades, para el eficiente desarrollo de las campañas políticas, que preceden a las elecciones en los regímenes democráticos. Siete procesos electorales exitosos, gracias al esfuerzo y al patriotismo de todos los partidos políticos, el respeto a las libertades, particularmente las que garantizan las funciones de los medios de comunicación, han permitido una participación amplia en los procesos electorales de todas las corrientes ideológicas. El respeto de ese proceso, puede medirse por la diversidad de credos políticos representados en el gobierno, que por primera vez en nuestra historia, lo integran todas las corrientes ideológicas con orgullo y profunda satisfacción, puedo decir, que buena parte de esas exitosas experiencias, es consecuencia de la mentalidad del ejército de El Salvador, que de este modo cumple su función como corresponde, a una Fuerza Armada en una democracia constitucional.

Este proceso democrático iniciado y desarrollado en el clima de un conflicto armado, probablemente sea uno de los argumentos más sólidos contra el conflicto, al volverlo innecesario como solución de diferentes posiciones ideológicas. Cuando se ha consolidado una apertura democrática confiable y efectiva, todas las tendencias tienen la facilidad de acceso al poder, por la vía de

la representación democrática.

La Fuerza Armada asumió un protagonismo responsable en los eventos electorales mencionados y ha venido colaborando con el gobierno de la república, en sus esfuerzos para lograr la paz por medio de una solución política más allá del elemento formal, porque está convencida que la guerra detiene el cambio y la Fuerza Armada está en el camino del cambio.

También es necesario decir que el proceso de cambio debe llegar a todos los estratos de la sociedad y dentro de ese proceso, aquellos que por cosas del pasado buscaron soluciones por medio de las armas, ahora pueden encontrar esas soluciones por la vía civilizada de su participación activa en el proceso democrático, sus ideales les demandan sustituir el odio por la concordia y los fusiles y las balas por las ideas y la imprenta.

El proceso de cambio en El Salvador está en marcha, con amplia participación de distintos sectores de la ciudadanía, entre los cuales es satisfactorio señalar el protagonismo de la Fuerza Armada, con su actitud receptiva al proceso de democratización y su estricto apego al principio de legalidad.

El cambio de mentalidad en la Fuerza Armada, que se concreta en la aceptación y solidaridad con los cambios, llegó a materializarse en forma institucionalizada, con las recientes reformas constitucionales del pasado mes de abril en lo que se refiere a la Fuerza Armada, las reformas mencionadas especifican con mayor precisión, su papel en el Estado democrático de derecho que organiza la constitución, su ubicación en la estructura del gobierno y particularmente su posición claramente pendiente de la autoridad civil.

Para la sociedad en general, corresponde ahora tener presente que la paz venidera no será un estado paradisiaco en el que por milagro se van a recuperar las primitivas virtudes naturales: solo una acción conjunta puede levantar el peso que significa la conducción de una sociedad convulsa a la fraternidad, la paz y el progreso.

La Fuerza Armada de El Salvador participa y está totalmente de acuerdo con las reformas constitucionales acordadas dentro del proceso para la consecución de la paz y cuya ratificación pende del resultado definitivo de las negociaciones. Yo, expreso aquí, por lo que los militares creemos y sentimos y por lo que estamos decididos a alcanzar.

Hemos hablado de la modernización de nuestras instituciones, y de que hemos comenzado el proceso de delimitación funcional de nuestra sociedad. Mediante las reformas constitucionales mencionadas se ha distri-

buido más apropiada y equilibradamente el poder político, al incorporar a los órganos y entidades del gobierno nuevos núcleos o entidades representativas de centros de influencia, de modo que sea más fácil mantener, como dijera don Oscar Arias, "el equilibrio que evita la dominación de unos grupos sobre otros".

En particular, en el nuevo ordenamiento constitucional, la Fuerza Armada, se reafirma como una institución permanente al servicio de la nación, obediente, profesional, apolítica y no deliberante; asignándosele como misiones, la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Asimismo se le llama a colaborar en las obras de beneficio público que le fueren encomendadas, así como auxiliar a la población en casos de desastre nacional. En circunstancias excepcionales, agotados los medios ordinarios, por disposición del presidente de la república, y con sujeción a mecanismos de control de la asamblea legislativa, deberá contribuir al mantenimiento de la paz interna. Y, también a hacer efectivas las disposiciones de los órganos fundamentales del gobierno, en sus respectivas áreas de competencia, para hacer cumplir la Constitución.

Otras atribuciones que conforme a la Constitución vigente atañen a la Fuerza Armada le son sustraídas por no corresponder a su propia esfera de competencia, todo, dentro del proceso de reordenamiento funcional de la sociedad salvadoreña.

Es importante destacar de estas reformas, que por medio de distintas formulaciones de varios preceptos, determinan la clara ubicación de la Fuerza Armada dentro de la estructura del gobierno como parte del órgano ejecutivo, así como la subordinación al poder civil, al que se da una clara prevalencia al mismo tiempo, se determina el carácter eminentemente instrumental y no decisivo de la Fuerza Armada como institución del Estado.

La reforma constitucional concreta además cambios significativos, como la creación de la Policía Nacional Civil, subordinada al presidente de la república, fuera de la estructura orgánica de la Fuerza Armada y adscrita a una secretaría de Estado, distinta a la de defensa: la creación del organismo de inteligencia de Estado, independiente de la Fuerza Armada y bajo la autoridad directa del presidente de la república, y la redefinición de la justicia militar, con el propósito de asegurar que sólo sean sometidas a ella, aquellos casos que afecten de modo exclusivo, un interés jurídico estrictamente militar, eliminándose la posibilidad de que civiles sean procesados ante tribunales militares.

Las reformas constitucionales responden al fortale-

cimiento de la institucionalidad democrática. De todos los sectores de nuestra sociedad se demanda disposición y preparación, para este proceso de cambios. Los militares aceptamos el reto, en el entendido que cada salvadoreño pondrá la parte que le corresponde.

Compenetrados de que los cambios profundos sólo se pueden comenzar en lo profundo, que es el espíritu, de que los cambios de mentalidad sólo se logran por medio de la educación y la concientización, vemos la necesidad de que se formule una declaración de principios, que nos guíe y nos comprometa a todos los salvadoreños: políticos, funcionarios de gobierno, líderes religiosos, trabajadores, empresarios, profesionales, militares y el pueblo en general, sobre nuestra participación en el proceso de transformación y de reconstrucción física y moral de nuestro país, en el período de transición de la guerra a la paz.

Estos son cambios que se están adoptando y que estamos en una total disposición de impulsar de manera que dentro del proceso de democratización y modernización de nuestra sociedad, la Fuerza Armada se perfila como una institución jerarquizada, disciplinada y subordinada, con una función específica enmarcada dentro de los diferentes campos de acción nacional e interrelacionada con ellos, para alcanzar y mantener los objetivos de nuestra nación.

A la Fuerza Armada, a sus miembros, corresponde participar de los cambios estructurales institucionales que les permitan cumplir con la eficiencia debida, su misión institucional en la sociedad que estamos edificando. Esto determinará óptimos niveles en la profesionalización del personal, reasignación de recursos y claro está, una readecuación de los efectivos conforme a las necesidades del servicio.

Porque nada es posible sin los hombres y nada duradero sin las instituciones, a nosotros corresponde hoy, de cara al futuro y a las nuevas generaciones, trabajar responsablemente por hacer de la Fuerza Armada de El Salvador, la más profesional de las fuerzas armadas.

Esto es lo que nuestro pueblo merece y esto es, precisamente, lo que le vamos a dar.

Un prócer de nuestra independencia dijo una frase que se ha repetido con insistencia: "El ejército vivirá mientras viva la república". Lo importante, lo que pensamos sobre este mensaje trascendental y visionario, consiste en no olvidar que si la república cambia, paralelamente deberá cambiar el ejército, pues para cumplir su misión en la nueva república, se necesita de una Fuerza Armada que asuma sus altas responsabilidades en el proceso de cambios por el bien de la patria.

### 3. Derechos humanos.

#### 3.1. Consejo Económico Social. Comisión de Derechos Humanos.

##### Situación de los derechos humanos en El Salvador.

*La subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías*

*Guiadas* por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 de los Convenios de Ginebra y de su Protocolo II Adicional,

*Viendo con beneplácito* que el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional desde el 4 de abril de 1990 están llevando a cabo un proceso de negociación, bajo los auspicios del Secretario General, con el propósito de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña,

*Tomando en cuenta* que el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional el 26 de julio de 1990, en San José de Costa Rica, adoptaron un trascendental acuerdo parcial sobre derechos humanos por el que se comprometieron, entre otras cosas, a tomar de inmediato todas las acciones y medidas necesarias para evitar todo tipo de hechos o prácticas que atenten contra la vida, la integridad y la libertad de las personas y a identificar y sancionar a quienes los sigan cometiendo,

*Observando* que las partes también acordaron en la ciudad de México, el pasado 27 de abril, importantes reformas a la constitución vigente con relación a la Fuerza Armada, sistema judicial, sistema electoral y derechos humanos, y además convinieron crear la Comisión de la Verdad encargada de investigar graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador desde 1980,

*Lamentando* que el acuerdo parcial sobre derechos humanos no haya tenido aún pleno cumplimiento ni se haya dado un avance sustancial en la investigación judicial y en la sanción de los responsables de los asesinatos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana,

1. *Expresa su complacencia* porque el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Libera-

ción Nacional, en sus esfuerzos por solucionar el actual conflicto armado, hayan celebrado acuerdos para verificación de las obligaciones en materia de derechos humanos como condición indispensable para garantizar una paz justa y duradera;

2. *Manifiesta su satisfacción* de que el pasado 26 de julio se haya establecido la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) cuya tarea inicial, sin precedente en la historia de las Naciones Unidas, será la de verificar el cumplimiento del Acuerdo sobre Derechos Humanos como parte de una operación integrada de mantenimiento de la paz;

3. *Solicita* a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para asegurar que haya progreso sustancial en la investigación judicial y en la sanción de los responsables de los asesinatos el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana;

4. *Insta* a las partes a que tomen de inmediato las acciones y medidas necesarias que acordaron para erradicar las violaciones a los derechos humanos y brinden su más amplio apoyo a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas proporcionándole todas las facilidades que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones, garantizando la seguridad de sus integrantes y atendiendo con la mayor prontitud las recomendaciones que les sean dirigidas por dicha Misión;

5. *Exhorta* a las partes a que continúen las negociaciones hasta alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin lo más pronto posible a la confrontación armada y crear bases firmes para impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña;

6. *Expresa su pleno apoyo* a la labor de intermediación que está realizando el Secretario General y su Representante Personal en la promoción de una solución política negociada del conflicto salvadoreño;

7. *Acuerda examinar* durante su 44º período de sesiones la situación de los derechos humanos en El Salvador teniendo en cuenta la evolución de la situación de los derechos humanos en ese país.